

CONTRATO MODIFICATORIO Nro. 01 AL CONTRATO DE OBRA NRO. 017-2025

OBJETO:	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN Y DEL CENTRO DE CONTROL PARA LA CIUDAD DE ARMENIA"
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT:	890.000.464-3
REPRESENTANTE LEGAL:	JAMES PADILLA GARCÍA
CARGO:	Alcalde Municipal
C.C.:	7.558.526 de Armenia (Quindío)
CONTRATISTA	UT SEMAFORIZACION Y MOVILIDAD S&S ARMENIA
NIT	902014124-8
REPRESENTANTE LEGAL:	EDGAR JIMENEZ CARREÑO
C.C.:	79.520.001 de Bogotá
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE (\$39.749.431.913), equivalentes a 27.923 SMLMV para el año 2025 (..)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de 18 meses, contados a partir de la configuración del inicio en la plataforma SECOP, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de condiciones.

Entre los suscritos a saber: **JAMES PADILLA GARCÍA**, mayor y vecino de Armenia (Quindío), identificado con la cédula de ciudadanía No. **7.558.526 de Armenia (Quindío)**, obrando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE ARMENIA** con Nit. 890000464-3, en su calidad de Alcalde Municipal, debidamente autorizado para celebrar contratos de conformidad con el artículo 11 numeral 3, literal b) de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Decreto Municipal No. 029 del 30 de enero de 2025 "*Por medio del cual se delegan funciones y se desconcentran actividades relacionadas con las etapas precontractual, contractual y poscontractual de la administración municipal de Armenia, y se dictan otras disposiciones*" específicamente el artículo 29 en el cual se establecieron los actos reservados para la competencia del Alcalde Municipal y quien para efectos del presente modificatorio se denominará **EL MUNICIPIO**, y de otra parte la **UT SEMAFORIZACION Y MOVILIDAD S&S ARMENIA** con NIT **902014124-8** representado legalmente por **EDGAR JIMENEZ CARREÑO**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.520.001 de Bogotá, con capacidad para suscribir contratos, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar **MODIFICATORIO Nro. 01 AL CONTRATO OBRA NRO. 017-2025**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES:**

1). Que el artículo 2 de la Constitución Política establece como fines esenciales del Estado: "*Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo*".



R-DF-SGI-001 V2 21/02/2025

CAM, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630004
Contacto: Tel-(6) 7417100 - Correo Electrónico: alcalde@armenia.gov.co

Página 1 | 12

2) Que complementario de lo anterior, el artículo 209 de la Constitución Política establece que *"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. (...)"*

3). Que el artículo 311 de la Constitución Política señala: *"Al Municipio como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes"* y el artículo 315 de la mencionada norma superior establece las atribuciones de los Alcaldes, consagrando específicamente en el numeral 3 y 9 la de *"dirigir la acción administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo (...)"*; *"ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto"*, en concordancia con el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012..

4) Que para efectos de lo anterior, la Ley 80 de 1993 dispone las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales y en el artículo 3 establece que los servidores públicos tendrán en consideración al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, buscar el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

5). Que la Ley 80 de 1993, consagra los principios de transparencia, economía y responsabilidad, los cuales se deben tener en cuenta al momento de adelantar las actuaciones contractuales de las entidades estatales, para buscar de esta forma el cumplimiento de sus fines, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.

6). Que luego de adelantar proceso de contratación bajo la modalidad licitación pública de identificado con el Numero **SETTA-LP-004-2025**, posteriormente el día **5 de diciembre de 2025**, el Municipio de Armenia suscribió con la **UT SEMAFORIZACION Y MOVILIDAD S&S ARMENIA** el **Contrato de Obra Pública 017 de 2025** cuyo objeto contractual es **"SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN Y DEL CENTRO DE CONTROL PARA LA CIUDAD DE ARMENIA"**, busca modernizar y mejorar la gestión del tránsito en la ciudad de Armenia. su objetivo principal es hacer más seguro, eficiente y controlado el sistema de semáforos de la ciudad.

7.) Que el valor del **Contrato de Obra pública No. 017-2025** ascendió a la suma de **TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE (\$39.749.431.913)**,

8). Que el término de ejecución pactado en el **Contrato de obra pública No. 017-2025**, se estableció de la siguiente manera (...) **18 MESES**, contados a partir de la configuración del inicio en la plataforma SECOP, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de condiciones

10). Que la Interventoría del **Contrato de Obra No. 017-2025**, es realizada, por **IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U**, en ejercicio de sus funciones dio inicio del contrato en la plataforma del Secop II, registra fecha del doce (12) de diciembre de 2025.

11). Que el día veintitrés (23) de diciembre de 2025 con radicado de la misma fecha a las 5:30 pm, fue radicado en la Subdirección del Departamento Administrativo Jurídico, oficio remitisorio con consecutivo ST-PTM-SD-5324, por medio del cual la Secretaria de Transito remitió la



documentación para suscribir modificación al **Contrato de Obra No. 017-2025, donde se manifiesta la necesidad de modificar la cláusula 8**

12). Que dicho oficio viene acompañado de los siguientes documentos:

- Justificación de modificación Nro. 01 suscrito por el representante legal de Interventoría y el representante legal de la Unión Temporal Semaforización Y Movilidad S&S Armenia y con visto bueno por el Secretario de Tránsito y Transporte de Armenia- Daniel Jaime Castaño Calderon y el Secretario De Las Tecnologías De La Información Y Comunicaciones Juan Sebastián Herrera Pardo

13) Que la justificación de modificación Nro. 01 describe la necesidad y viabilidad técnica de la modificación, en los siguientes términos:

"Los contratos estatales tienen por finalidad la satisfacción del interés general, y como tal vinculan a la administración contratante y al ejecutor del contrato, entendido este último como un colaborador del Estado, orientado más que por fines de lucro, lo realiza en el marco del interés general, guía orientadora de la configuración del Estado Social de Derecho.

Que en la cláusula 8 FORMA DE PAGO, se describió que el valor total del contrato se pagaría a través del sistema de PRECIOS UNITARIOS, sin formula de ajustes y por avances de la obra. Es decir, su redacción es la siguiente:

"El contrato es a precios unitarios sin fórmula de ajustes, se pagará por avances de obra hasta el 90% y el 10% a la liquidación, de acuerdo con las vigencias aprobadas.

*Pago No. 1 hasta por un valor (15,83%) vigencia 2025
Pago No. 2 hasta por un valor (63,33%) vigencia 2026
Pago No. 3 hasta por un valor (20,84%) vigencia 2027.*

PARÁGRAFO: El 10% del 20,84% señalado en el pago No. 3 en la vigencia 2027 estará supeditado a la liquidación del contrato (...)"

Como se logra observar, existe una imprecisión en relación con la forma de pago, toda vez que pareciera limitarse el valor del pago, únicamente a tres pagos según la vigencia fiscal, lo que desnaturaliza el sistema de precios unitarios, obedeciendo en realidad a un error en la digitación, que bien pudiera afectar el equilibrio y la ejecución natural del contrato, llevando incluso a circunstancias inadecuadas en este tipo de contratos.

De esta manera, claro está que el artículo 49 de la ley 80 de 1993, el cual es consonante con el artículo 3 de la ley 1437 de 2011 y el artículo 45 de ídem, permiten a la administración la adopción de medidas de corrección de la actuación administrativa contractual, de tal manera que se mantengan los fines, pero también la intención de las partes, máxime cuando en estos casos aplican los principios de interpretación de los contratos contemplados en el Código Civil Colombiano.

Acorde con lo anterior, y evidenciando que se pueden generar dificultades graves para la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato, el ente contratante a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, la interventoría y el contratista reconocen la necesidad de celebrar un contrato modificatorio número 001 al contrato de obra pública 017 de 2025, en lo relacionado con la cláusula 8.

Justificación Constitucional:

Artículo 2º Constitución Política: Artículo 2º. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Justificación Jurisprudencial

Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.¹ Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la **sentencia C-949 de 2001**², la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos —como especie de modificación— pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal.³ Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en **concepto del 13 de agosto de 2009**:

"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que **la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo**. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado."⁴

La modificación de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por naturaleza **incompletos**, es decir, (i) los afectados por asimetrías de información que impiden la previsión de todas las contingencias que pueden afectar su ejecución, y (ii) en el marco de los cuales, por esa misma razón, es difícil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo plazo.⁵ En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnológicas, culturales, etc. sobre la forma cómo el Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del diseño del negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio adecuado y específico. En este tipo de contratos es preciso entonces el diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica de las controversias para evitar el fracaso.

Que la presente modificación cumple con los requisitos previstos en materia de adición, por la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en su **sentencia del 16 de marzo de 2015**, M.P. Dra. Olga Mérida Valle de la Hoz (E), radicado 30689, en la que se indica: (...) "De modo que, para verificar la legalidad de un acuerdo que contiene una modificación del contrato inicial es preciso, a la luz de las normas generales de contratación pública contenidas en la ley 80 de 1993, verificar los siguientes aspectos: i) que el contrato adicional o modificadorio conste por escrito, en la medida que si es requisito de existencia del contrato estatal que se eleve a escrito de conformidad con el artículo 40 ibídem, esa misma exigencia se hace extensible al acuerdo modificadorio, ii) se suscriba la convención dentro del plazo o vigencia del contrato, toda vez que un contrato cuyo plazo o condición ha operado, no es susceptible de ser adicionado, circunstancia en la que habría lugar a adelantar un nuevo proceso licitatorio o de selección

¹ Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de derecho, ver la **sentencia C-932 de 2007**, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

² M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

³ Ver también la **sentencia C-068 de 2009**, M.P. Mauricio González Cuervo, sobre la constitucional de la posibilidad de prorrogar los contratos de concesión portuaria (artículo 8º de la ley 1º de 1991).

⁴ Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo. En este concepto la Sala de Consulta se ocupó, entre otras preguntas, de la siguiente formulada por el Ministerio de Transporte: "1. ¿Bajo el supuesto que en un contrato de concesión existan razones de conveniencia que permitan una mejora del objeto contratado y una mejor prestación del servicio público encomendado a la entidad estatal contratante, es posible, por fuera de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 y en caso de que las partes hubieran pactado una modificación de común acuerdo desde la licitación, acudir a tal previsión y modificar el contrato, teniendo en cuenta, además, que con la modificación se busca un efectivo cumplimiento de los fines estatales y una eficiente prestación de los servicios públicos?"

⁵ Esta clasificación es tomada de la literatura del análisis económico del derecho. Ver WILLIAMSON, Oliver E. "Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations". En: Journal of Law and Economics, Vol. 22, No. 2 (Oct., 1979), pp. 233-261. SHAVELL, Steven. "Foundations of Economic Analysis of Law". Harvard University Press, 2004. Dentro de esta literatura, también se señalan como causas de los contratos incompletos, (i) los altos costos de estructuración del contrato, esto es, las altas inversiones que deben realizar las partes para prever las contingencias y diseñar remedios; cuando tales costos exceden los beneficios esperados por las partes, estas últimas pueden optar por celebrar contratos incompletos y dejar por fuera, por ejemplo, previsiones o cláusulas relacionadas con contingencias de baja probabilidad. (ii) Los altos costos de hacer cumplir ciertas cláusulas, y (iii) la dificultad posterior de probar en sede judicial la ocurrencia de ciertas contingencias o variables, entre otras. Vale la pena mencionar que por estas razones la mayoría de los contratos tienden a ser incompletos.



de contratista, iii) que no se adiciones-por regla general-en más allá del cincuenta (50) por ciento de su valor inicial, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes, iv) que el objeto del contrato principal no se haya agotado, es decir, que todavía exista y sea viable su ejecución, y v) que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so pena de que el contrato adicional quede afectado de nulidad (...); .

Justificación Jurídica

Debe señalarse en este punto, que en la contratación estatal se aplican las normas propias del derecho civil y del derecho comercial, en todos aquellos aspectos no regulados por el Estatuto General de contratación de la Administración Pública, tal como lo señala el artículo 13 de la Ley 80 de 1993. Es decir, si bien es cierto no existe una autonomía ilimitada como sí existe en los negocios jurídicos netamente entre particulares, existe una libertad negocial reglada, que responde a una satisfacción del interés general.

En este entendido, el contrato celebrado fue de obra pública, por el sistema de precios unitarios, de donde se desprende que se trata de un contrato de valor indeterminado pero determinable, y que el valor del contrato resulta de la multiplicación de las cantidades ejecutadas por los precios unitarios pactados, misma suerte que sigue la forma de pago de dichos contratos.

Así las cosas, resulta totalmente errado que en la estructuración del proceso selectivo se haya establecido que el pago se realizaría según actas de avance de obra, pero que en la redacción del contrato se incluya una cláusula de forma de pago que no responde a los avances de obra, sino que limita a tres pagos (según disponibilidad anual en las vigencias futuras), sin que implique ello la exigencia de la entrega de dichos avances. También afecta el flujo económico de un contrato que no tiene anticipo, y que en últimas puede conllevar a un cambio en las condiciones de participación.

En virtud de lo anterior, el artículo 3 de la ley 1437 de 2011 contempla el principio de eficacia, según el cual la administración está en la obligación de retirar todos los obstáculos de sus actuaciones administrativas, habilitándose a la misma a realizar las correcciones a que haya lugar, tal como lo indica el artículo 41 de la misma normativa. Dichas normas rezan al siguiente tenor:

“ARTÍCULO 3. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

(...)

ARTÍCULO 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla.”

Por su parte el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en su artículo 49 contempla un mecanismo similar para la solución de este tipo de problemáticas:

“ARTÍCULO 49. DEL SANEAMIENTO DE LOS VICIOS DE PROCEDIMIENTO O DE FORMA. Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad y cuando las necesidades del servicio lo exijan o las reglas de la buena administración lo aconsejen, el jefe o representante legal de la entidad, en acto motivado, podrá sanear el correspondiente vicio.”

Es así como en este caso, se ha detectado la existencia de un defecto en la redacción de la forma de pago, que debe ser eliminada, dada la contradicción y confusión que se genera en la interventoría y el contratista, y siendo que la intención de las partes estaba direccionada al respeto por un monto autorizado para la asunción de compromisos con vigencias futuras.

Con base en los argumentos expuestos se solicita y/o requiere:

1- Autorizar la modificación del Contrato de OBRA PÚBLICA 017 DE 2025, en específicamente la cláusula "8. FORMA DE PAGO", en el sentido de modificar la redacción de dicha cláusula, misma que se muestra actualmente confusa en relación con la tipología del contrato, que es un contrato de obra a precios unitarios. Se sugiere que la redacción de la cláusula sea la siguiente:

"CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

El contrato es a precios unitarios sin fórmulas de ajustes, se pagará por avances de obra hasta el 90% del valor total del contrato, respetando los límites de las vigencias futuras aprobadas por el Concejo Municipal a través del Acuerdo 348 de 2025, así:

Límite para la anualidad 2025: \$6.750.150.100

Límite para la anualidad 2026: \$25.569.792.348

Límite para la anualidad 2027: \$7.429.489.465

Nota: En la vigencia 2027, se descontará el 10% del valor aprobado para la misma, el cual se pagará con el acta de liquidación.

Para las actas parciales el contratista deberá presentar la siguiente documentación:

En forma previa a la autorización de cada pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Parágrafo 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

Parágrafo 3. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Parágrafo 4. Para efectos del pago mensual correspondiente a la ejecución de PMA, la Interventoría verificará que el Contratista cumpla fielmente con cada una de las obligaciones de carácter Ambiental y de Gestión Social plasmadas en los diferentes componentes y programas contenidos en el documento del PMA y pagará únicamente lo realmente ejecutado luego de esta verificación; teniendo como referencia el valor total propuesto por el Proponente para la Gestión Socio-Ambiental de la lista de cantidades del Presupuesto General y de conformidad con el porcentaje de calificación mensual obtenido en cada componente o programa.



R-DF-SGI-001 V2 21/02/2025



CAM, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630004
Contacto: Tel: (6) 7417100 - Correo Electrónico: alcalde@armenia.gov.co



Página 6 | 12

NOTAS:

-Dada la naturaleza del contrato, los suministros, equipos y demás solo se pagarán, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la interventoría.

-No se reconocerá, ningún reajuste realizado por el contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.

-Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podrán superar el valor total del presupuesto estimado.

-Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin generar intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estará supeditado en ningún caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante.

- Las facturas emitidas deberán contemplar los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad con su régimen tributario.

-Todas las actas y pago deberán ser refrendados o avalados por el interventor designado para la ejecución del proyecto.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda".

Aunado lo anterior, se autoriza y se solicita la modificación del **CONTRATO DE OBRA No. 017 de 2025**, procurando la debida ejecución del contrato y garantizando el cumplimiento de los principios de la contratación estatal, toda vez que se encuentra justificado y no corresponden a objetos nuevos o a especificaciones que alteren la esencia de la necesidad a satisfacer. Las demás estipulaciones contractuales contenidas en el Contrato de Obra Pública 017 de 2025 continuarán vigentes y no sufren modificación alguna"

14). Que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 preceptúa "(...) **De los contratos estatales.** Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación (...)" los cuales de conformidad con el artículo 13 de la mencionada Ley 80 de rigen por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por dicha Ley.

15) Que, frente a la existencia del negocio jurídico, el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, dispone: "**Del perfeccionamiento del contrato.** Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito" y el **artículo 1602 del Código Civil**, establece que los contratos válidamente celebrados son Ley para las partes



R-DF-SGI-001 V2 21/02/2025



CAM, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630004
Contacto: Tel-(6) 7417100 - Correo Electrónico: alcalde@armenia.gov.co

Página 7 | 12

y sólo pueden ser invalidados por consentimiento mutuo de quienes los celebran o por causas legales ("lex contractus, pacta sunt servanda")⁵.

16) Que mediante criterio auxiliar de interpretación por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado⁶, se determina que los contratos estatales no tienen existencia, si los mismos no han sido elevados por escrito, de la misma forma deberán ser todas aquellas modificaciones que se le hagan al mismo.

17) Que los contratos estatales como categoría de acuerdos bilaterales celebrados por una entidad estatal, surgen como resultado de la autonomía de la voluntad de la administración, y por ende por regla general, **pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado**, a los cuales sirve el contrato.⁷ Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en **concepto del 13 de agosto de 2009**:

*"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado."*⁸

18). Que la modificación de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por naturaleza **incompletos**, es decir, (i) los afectados por asimetrías de información que impiden la previsión de todas las contingencias que pueden afectar su ejecución, y (ii) en el

⁵ «Contractus qui habent tractum succesivum et dependiam de futuro rebus sic stantibus intelliguntur»: los contratos de tracto sucesivo celebrados y que dependan de resultados en el futuro, deben ser entendidos con la condición de que las circunstancias continúen siendo las mismas o se mantengan. Esta cláusula –sin detenernos en sus orígenes– surgió para morigerar el rigorismo de la cláusula pacta sunt servanda (los contratos se celebran para cumplirse), en aquellos casos en que aplicar esta última al amparo del derecho positivo daba lugar a soluciones injustas, abusivas y usureras, de suerte que para preservar la equidad contractual y bajo la buena fe y la moral se hacía imperiosa la revisión del negocio jurídico.

⁶ Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, EXP. 15596, M.P. Mauricio Fajardo Gómez: "(...) Esto último, en cuanto que la modificación respecto de un acuerdo que consta por escrito debe surtir el mismo proceso que se dio para su constitución, dado que el acuerdo modificatorio está tomando el lugar del acuerdo originario y la solemnidad que se predica legalmente del segundo ha de ser exigida para el reconocimiento de eficacia, existencia y validez del primero. El artículo 1602 del Código Civil, claramente consagra esta regla bajo la definición de que: "[T]odo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales." En este caso, el consentimiento mutuo para adicionar esa ley particular que es el contrato debe corresponder a las condiciones legales que se exigían para la creación del vínculo jurídico originario (...).".

⁷ Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de derecho, ver la sentencia C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

⁸ Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo. En este concepto la Sala de Consulta se ocupó, entre otras preguntas, de la siguiente formulada por el Ministerio de Transporte: "1. ¿Bajo el supuesto que en un contrato de concesión existan razones de conveniencia que permitan una mejora del objeto contratado y una mejor prestación del servicio público encomendado a la entidad estatal contratante, es posible, por fuera de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 y en caso de que las partes hubieran pactado una modificación de común acuerdo desde la licitación, acudir a tal previsión y modificar el contrato, teniendo en cuenta, además, que con la modificación se busca un efectivo cumplimiento de los fines estatales y una eficiente prestación de los servicios públicos?"

⁵ Esta clasificación es tomada de la literatura del análisis económico del derecho. Ver WILLIAMSON, Oliver E. "Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations". En: Journal of Law and Economics, Vol. 22, No. 2 (Oct., 1979), pp. 233-261. SHAVELL, Steven. "Foundations of Economic Analysis of Law". Harvard University Press, 2004. Dentro de esta literatura, también se señalan como causas de los contratos incompletos, (i) los altos costos de estructuración del contrato, esto es, las altas inversiones que deben realizar las partes para prever las contingencias y diseñar remedios; cuando tales costos exceden los beneficios esperados por las partes, estas últimas pueden optar por celebrar contratos incompletos y dejar por fuera, por ejemplo, previsiones o cláusulas relacionadas con contingencias de baja probabilidad. (ii) Los altos costos de hacer cumplir ciertas cláusulas, y (iii) la dificultad posterior de probar en sede judicial la ocurrencia de ciertas contingencias o variables, entre otras. Vale la pena mencionar que por estas razones la mayoría de los contratos tienden a ser incompletos.



marco de los cuales, por esa misma razón, es difícil prever *ex ante* los remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo plazo.⁵ En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnológicas, culturales, etc. sobre la forma cómo el Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del diseño del negocio, para las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio adecuado y específico. En este tipo de contratos es preciso entonces el diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica de las controversias para evitar el fracaso. En el caso colombiano, la modificación puede ser fruto de un acuerdo de voluntades o de una decisión unilateral de la entidad contratante en ejercicio de su función de dirección del contrato. En este sentido y en relación con la interpretación del artículo 16 de la Ley 80, la Sala de Consulta aseveró:

"La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar ... diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar."

19) Que el Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil en sentencia del cinco (5) de julio de dos mil dieciséis (2016) con radicación interna: 2278 número único: 11001-03-06-000-2016-00001-00 recuerda la Sala que "(...) la justificación del **principio general de conservación** de los contratos reside en que no obstante que se pueden observar imperfecciones en el curso de la ejecución del contrato, las partes normalmente tienen interés en mantener vigente el negocio originario, ya que lo contrario supondría comenzar de nuevo con la consecuente pérdida de tiempo y de recursos, razón por la cual se les impone el deber de hacer "lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla" y acordar "los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente" las situaciones que lleguen a presentarse".

20) Que en este mismo sentido, el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto 1439 del 18 de julio de 2002. Consejera Ponente: Susana Montes de Echeverri, preciso:

"Por consiguiente, si para alcanzar el objeto contractual se hace necesario corregir errores de diseño o buscar soluciones técnicas alternativas frente a eventos no previstos, la administración está en la posibilidad, y en el deber jurídico, de adecuar los diseños y estudios, así ello implique la ejecución de una mayor cantidad de obra y el desarrollo de obras adicionales al objeto contractual, máxime si, como en el caso que nos ocupa, actuar de una manera distinta puede comprometer la estabilidad misma de los trabajos."

(...)

De lo anterior resulta claro que es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación; es un imperativo de su gestión, al cual no puede sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en contra de lo previsto en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993(5). Desde luego que si las modificaciones requeridas implican adiciones en el alcance del objeto contractual o exigen la creación de



R-DF-SGI-001 V2 21/02/2025

CAM, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630004
Contacto: Tel-(6) 7417100 - Correo Electrónico: alcalde@armenia.gov.co

Página 9 | 12

nuevos ítems de contrato o variación en los precios unitarios, tales modificaciones deberán recogerse en un contrato adicional; si ellas solo exigen modificaciones de diseño o de cantidades de obra simplemente, no será necesario suscribir un contrato adicional y bastará, entonces, el acuerdo entre las partes."

21) Que efectuadas las anteriores consideraciones y de conformidad con la justificación de la modificación Nro. 01, las partes aquí firmantes han decidido suscribir el modificadorio Nro. 01 al **CONTRATO DE OBRA No. 017 de 2025** suscrito con la UT SEMAFORIZACION Y MOVILIDAD S&S ARMENIA, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la **CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO** en el sentido de corregir una redacción imprecisa que contradice el sistema de precios unitarios, limita indebidamente los pagos por vigencias y puede afectar la ejecución y el equilibrio contractual, aclarando la intención real de las partes y previamente avalada por el Interventor. En consecuencia, la cláusula 8 quedara de la siguiente forma:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

El contrato es a precios unitarios sin fórmulas de ajustes, se pagará por avances de obra hasta el 90% del valor total del contrato, respetando los límites de las vigencias futuras aprobadas por el Concejo Municipal a través del Acuerdo 348 de 2025, así:

Límite para la anualidad 2025: \$6.750.150.100
Límite para la anualidad 2026: \$25.569.792.348
Límite para la anualidad 2027: \$7.429.489.465

Nota: En la vigencia 2027, se descontará el 10% del valor aprobado para la misma, el cual se pagará con el acta de liquidación.

Para las actas parciales el contratista deberá presentar la siguiente documentación:

En forma previa a la autorización de cada pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Parágrafo 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

Parágrafo 3. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando



CAM, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630004
Contacto: Tel-(6) 7417100 - Correo Electrónico: alcalde@armenia.gov.co

corresponda.

Parágrafo 4. Para efectos del pago mensual correspondiente a la ejecución de PMA, la Interventoría verificará que el Contratista cumpla fielmente con cada una de las obligaciones de carácter Ambiental y de Gestión Social plasmadas en los diferentes componentes y programas contenidos en el documento del PMA y pagará únicamente lo realmente ejecutado luego de esta verificación; teniendo como referencia el valor total propuesto por el Proponente para la Gestión Socio-Ambiental de la lista de cantidades del Presupuesto General y de conformidad con el porcentaje de calificación mensual obtenido en cada componente o programa.

NOTAS:

- Dada la naturaleza del contrato, los suministros, equipos y demás solo se pagarán, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la interventoría.
- No se reconocerá, ningún reajuste realizado por el contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.
- Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podrán superar el valor total del presupuesto estimado.
- Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin generar intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estará supeditado en ningún caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante.
- Las facturas emitidas deberán contemplar los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad con su régimen tributario.
- Todas las actas y pago deberán ser refrendados o avalados por el interventor designado para la ejecución del proyecto.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Las demás estipulaciones contractuales contenidas en el Contrato de Obra Pública 017 de 2025 continuarán vigentes y no sufren modificación alguna"

CLÁUSULA SEGUNDA: Las demás cláusulas del contrato de obra se mantendrán incólumes, y en consecuencia no sufren modificación alguna.

CLÁUSULA TERCERA: El presente contrato modificatorio se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes, en la plataforma SECOP II.

Firma electrónica: La plataforma del SECOP II maneja para los procesos de contratación y los contratos celebrados la firma electrónica. El SECOP II se rige por las normas del Sistema de Compra Pública y por aquellas que rigen el comercio electrónico, de esta manera dentro de la plataforma quien se inscribe obtiene una firma electrónica con su usuario y contraseña, el cual es personal e intransferible, y obliga por medio de esta firma a quien suscriba el contrato, o a la persona a la que el firmante representa. La firma electrónica que manejan los usuarios del SECOP II cumple con los requisitos de confiabilidad de las firmas electrónicas exigidos por el Decreto 2364 de 2012, artículo 4, como que los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente al firmante y es posible



R-DF-SGI-001 V2 21/02/2025

CAM, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630004
Contacto: Tel-(6) 7417100 - Correo Electrónico: alcalde@armenia.gov.co

Página 11 | 12

detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, hecha después del momento de la firma gracias al sello de tiempo de la plataforma.

1 Concepto de Colombia Compra Eficiente

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/concepto_firma_y_contrato_electronico_0.pdf

Elaboró: Leydi Ivonne Bocanegra Díaz- Contratista DAJ

Revisó: María Camila León Sánchez- Profesional Especializado DAJ

Vbno: Claudia Lorena Moreno Arroyave – Subdirectora DAJ (E)

Vbno: Lina María Mesa Moncada - Asesora de Despacho

Vbno: Andrés Mauricio Quiceno- Abogado Despacho Alcalde

Aprobó: James Padilla García – Alcalde Municipal